COMPATIBILIDAD DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA CON LA RESOLUCIÓN CONVENCIONAL

COMPATIBILITY OF THE RESOLUTORY ACTION WITH THE CONVENTIONAL RESOLUTION

Carlos Pizarro Wilson*

RESUMEN

En este texto analizamos un problema jurídico relacionado con la resolución del contrato, la cual puede verificarse en modalidad judicial, que es su tratamiento legal tradicional, el que exige el ejercicio de acción resolutoria y aquella convencional, emanada del acuerdo de las partes bajo una cláusula dispuesta en el contrato. Acá defendemos la tesis de la compatibilidad de la acción resolutoria en la modalidad de resolución judicial, aunque se haya estipulado una cláusula resolutoria. La preferencia por la compatibilidad la basamos en asumir la resolución convencional como una potestad, disponible de manera unilateral para el acreedor, el cual puede por su mera voluntad decidir no ejercerla y optar por la acción resolutoria judicial, la cual se entiende incorporada a todo contrato bilateral, salvo cláusula expresa en contrario.

PALABRAS CLAVE: resolución del contrato; resolución judicial; cláusula resolutoria

ABSTRACT

A legal problem related to the resolution of the contract is analyzed, which can be verified in a judicial and traditional modality that requires

* Profesor titular de Derecho civil, Universidad Diego Portales. Doctor en Derecho, Universidad París II Panthéon-Assas. Correo electrónico: carlos.pizarro@udp.cl

Agradezco a Karen Muñoz Villagra por los comentarios y edición del texto y a Gonzalo Sánchez Sandoval por su generoso trabajo en su adaptación.

Recepción: 2021-07-26; aceptación: 2022-01-18.

the exercise of resolutive action and, on the other hand, the conventional one, emanating from the agreement of the parties. Here the thesis of the compatibility of the resolution action in the modality of judicial resolution will be defended, even though a resolutive clause has been stipulated. The preference for compatibility is based on the assumption of the conventional resolution as a power available unilaterally to the creditor, who may decide not to exercise it and opt for the judicial resolutive action, which is understood to be incorporated in all bilateral contracts, unless there is an explicit clause that states otherwise.

KEYWORDS: contract resolution; judicial resolution; resolution clause

INTRODUCCIÓN

La facultad de resolver se encuentra prevista en el artículo 1489 del *Código Civil*, junto con la alternativa de requerir la ejecución forzada, más la indemnización de los perjuicios a favor del acreedor, quien es víctima del incumplimiento, lo que se conoce de manera tradicional como la condición resolutoria tácita¹.

110

El *Código Civil* chileno optó por un modelo judicial de resolución, lo que fue usual en el siglo XIX al seguirse el prototipo francés². El acreedor a quien afecta el incumplimiento puede demandar la resolución judicial, lo que permite la extinción del contrato o la restitución de lo que se haya ejecutado, colocando en práctica una liquidación económica del acuerdo³. En consecuencia, el juez es un actor esencial para que estos efectos se produzcan, los cuales sólo quedan consolidados con la sentencia ejecutoriada.

Este tratamiento ha sido cuestionado de manera intensa en la actualidad. La crítica se ha planteado en la necesidad de esperar una decisión de la judicatura para que el contrato se entienda resuelto, dejando a las partes atadas durante un largo período mientras se decide la contienda. Eso mismo ha potenciado la necesidad de reformar los códigos civiles que no contemplan la resolución unilateral por notificación, tal como ocurre con el *Código Civil* chileno. De manera reciente el *Código Civil* francés introdujo la resolución por notificación, aunque considerando no sólo la

¹ En términos amplios, CLEMENTE (1998); ÁLVAREZ (2009); GENICON (2007); MEJÍAS (2011a), pp. 171-212; y, MEJÍAS (2011b).

² Un análisis precedente a la reforma de 2016 en FABRE-MAGNAN (2008), p. 615 y CARBONNIER (2004), p. 2232. Después de la reforma, en FABRE-MAGNAN (2016), p. 737 y ss.

³ Sobre los efectos de la resolución, PIZARRO (2012), pp. 449-460 y MOMBERG y PIZARRO (2018), pp. 329-360.

convencional, sino también aquella judicial, compatible con todo otro tipo de resolución⁴.

Ante la ausencia de proyectos de reforma en este ámbito, la práctica contractual ha hecho frecuente el pacto de cláusulas resolutorias, mediante las cuales se modelan sus contornos por vía convencional⁵. Se trata de acuerdos explícitos en que se determina que, en el evento que se verifique el incumplimiento de determinadas obligaciones ahí especificadas, el acreedor podrá colocar término al vínculo mediante la notificación de su voluntad en ese sentido. Lo anterior, se hará a través de un procedimiento que también se establece convencionalmente o bajo la alternativa de otorgar un plazo de gracia que, una vez expirado sin ejecutarse lo pactado, producirá su resolución⁶.

La resolución derivada de este tipo de estipulaciones, como puede observarse, es de índole extrajudicial, pues opera por la notificación de la voluntad del acreedor de hacerla efectiva, sin que se ejerza una acción ante un tribunal estatal o arbitral. Opera a espaldas del juez, el cual, sin embargo, espera atento, agazapado, en el evento que se le solicite verificar el cumplimiento de los requisitos de la cláusula, ya sea en lo sustantivo o en su puesta en práctica. Mediante la cláusula resolutoria opera una inversión de la carga de accionar, sin que se excluya al juez en forma total, pues queda en sus manos el control de la validez y eficacia de la convención que puede reclamar la parte contra quien se hizo valer el efecto resolutorio.

Las ventajas de esta modalidad son elocuentes, al excluir un juicio tedioso y prolongado para obtener el término del acuerdo. Sólo en el evento que el deudor contra quien se hace valer estime que no se satisfacen las condiciones de la resolución, se judicializará el asunto. En ese caso, se reclamará, ya sea que no se reúnen las condiciones para resolver el contrato o que fue efectuada en desapego al procedimiento acordado, lo que justificará que demande el cumplimiento o la resolución del mismo, en ambos casos con indemnización de los perjuicios.

En general, los trabajos académicos se han ocupado de justificar la validez de las cláusulas resolutorias, lo que, como es bastante obvio, se funda en la libertad contractual, quedando sometidas a los requisitos comunes de los acuerdos contractuales. También se han indicado sus condiciones, las que refieren a la necesidad de que los incumplimientos que dan lugar a la resolución extrajudicial por notificación se encuentren debidamente especificados, so pena de reconducir la cláusula a una resolución judicial⁷.

⁴ DESHAYES *et al.* (2016), p. 497 y ss.

⁵ Recientemente, VIDAL (2019) y PIZARRO (2013), pp. 357-368.

⁶ CÁRDENAS y REVECO (2018), p. 240 y ss.

⁷ CÁRDENAS y REVECO (2018), p. 240.

Se aparta eso sí de la resolución judicial en que, a diferencia de ésta, el incumplimiento resolutorio se justifica en el acuerdo de las partes, y procederá de igual manera la resolución, dado que así lo estimaron las partes asignándole el carácter de resolutorio. Además, el efecto va asociado a un acto recepticio de la voluntad de la parte que quiere hacer valer la cláusula conforme el procedimiento acordado, ya sea en forma directa con la mera notificación o con un plazo de gracia para cumplir y, en este caso, sólo en el evento que se persista en el incumplimiento se producirá la resolución. Todo en un ambiente extrajudicial, alejado del juez.

Así queda plasmado el funcionamiento y condiciones que debe revestir la cláusula, mas su relación y compatibilidad con la acción resolutoria, emanada de la denominada condición resolutoria tácita, no ha provocado consenso.

En efecto, un asunto poco explorado y de gran importancia práctica es la compatibilidad de la cláusula resolutoria con la acción resolutoria del derecho común. A pesar de la preferencia de la cláusula frente a la resolución judicial, la cual requiere un procedimiento ordinario o arbitral que culmine en una sentencia ejecutoriada, la necesidad, en determinadas situaciones, justifica la opción por la resolución judicial. Así, por ejemplo, si la cláusula resolutoria estableció un plazo de gracia desde la notificación de la intención de resolver y dicha notificación no se realizó, sino que sólo se informó a la otra parte de la resolución, nos encontraríamos frente a una situación en que se ve frustrada la resolución convencional extrajudicial. ¿Debe aquí entenderse que quien puso en práctica en forma incorrecta el procedimiento carece de la facultad de ejercer la acción resolutoria? O, si se demanda el cumplimiento forzado y la otra pretende reconvenir mediante la acción resolutoria ¿no podría hacerlo al haberse pactado una cláusula resolutoria?

El problema consiste entonces en averiguar si, habiéndose acordado una cláusula resolutoria las partes se ven privadas, o no, de ejercer la acción ante el juez estatal o arbitral. Se excluye acá la situación en que de manera explícita se haya renunciado a la resolución judicial, lo que es tolerado en virtud de la libertad contractual. Acá se trata de la cláusula resolutoria establecida en el contrato sin que se haya renunciado en el mismo a la vía judicial. Luego, la pregunta es, ¿pueden las partes recurrir al juez para reclamar la resolución judicial si acordaron una cláusula resolutoria? ¿Es compatible la resolución judicial con una cláusula resolutoria expresa?

En este trabajo abogamos por la afirmativa, lo que pretendemos justificar a partir de calificar la resolución convencional y aquella judicial como potestades a favor del acreedor.

I. LA RESOLUCIÓN CONVENCIONAL: UNA POTESTAD DEL ACREEDOR

Ya sea que se trate de la resolución convencional o judicial resulta útil desentrañar qué es lo que surge a favor del acreedor una vez que se satisfacen los requisitos para resolver el contrato. Pese al escepticismo al descifrar cómo denominar la posición de la parte que se reclama acreedora ante el incumplimiento que justifica la puesta en práctica de ambos mecanismos, podemos aseverar que entre las partes existe una relación jurídica. Pero, como se ha afirmado con agudeza

“las relaciones jurídicas estrictamente fundamentales, después de todo, son *sui generis*. Es por ello que los intentos de definición formal son siempre insatisfactorios, si no completamente inútiles”⁸.

Esto no ha desalentado el esfuerzo de descifrar la calificación de las relaciones jurídicas, lo que puede ayudar a disipar nuestro asunto, esto es, el de la compatibilidad o incompatibilidad de la acción resolutoria con aquella convencional extrajudicial.

En no pocas oportunidades se asigna el calificativo de derecho a la facultad de resolver el contrato. El acreedor tendría el “derecho” a resolverlo, ya sea por notificación o por acción judicial. Así, por ejemplo, Vidal y de la Maza, a propósito del debate sobre el efecto automático o con acto recepticio del acreedor en el caso del pacto comisorio calificado en contratos distintos a la compraventa y la obligación de pagar el precio, califican el derecho que surge de la resolución convencional como uno “potestativo” o de “configuración”, renunciable y que mira al sólo interés del acreedor⁹. Se predica que una vez satisfechos los supuestos de la resolución se trataría de un “derecho”, “potestativo” y, además “de configuración”. Vidal señala:

“Sin embargo, encontramos otra mirada –que es la que aquí defendemos– que conecta de modo necesario a la cláusula resolutoria con la facultad de resolver del artículo 1489 del Código Civil –cuya

⁸ HOHFELD (2001), p. 47.

⁹ El *Código Civil* sólo regula el pacto comisorio a propósito de la compraventa y de la obligación de pagar el precio. El artículo 1879 dispone que “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”. El efecto automático del término del contrato se altera por la regla, obligando al vendedor a ejercer la acción resolutoria si desea colocar término al contrato, contrariando lo acordado por las partes. Sobre este asunto, PIZARRO (2013), p. 357 y ss. y CÁRDENAS y REVECO (2018), p. 245.

naturaleza jurídica es la de constituir un derecho potestativo o de configuración–, ahora modelada convencionalmente, siendo este uno de los argumentos para negar el efecto resolutorio automático por el solo incumplimiento”¹⁰.

Es decir, se entiende la resolución convencional como un “derecho potestativo o de configuración”, exigiéndose así un acto recepticio para hacer valer el derecho resolutorio. De la Maza y Vidal repiten esta idea y señalan

“Sin embargo, existe otra lectura –que es la que aquí defendemos– que vincula de modo necesario a las cláusulas resolutorias con la facultad de resolver del artículo 1489 del Código Civil, ahora, eso sí, modelada convencionalmente”¹¹.

Con todo, la expresión derecho, que en este caso se usa en cuanto derecho subjetivo, puede llevar a un equívoco. Se suele criticar una imprecisión jurídica al atribuir el calificativo de derecho para referirse a la posición del acreedor una vez cumplidas las condiciones de la resolución del contrato. Destacando esta inexactitud o imprecisión en el lenguaje de los conceptos, Hohfeld indica que

“la palabra ‘derechos’ (subjetivos) tiende a ser usada indiscriminadamente para cubrir lo que en un caso dado puede ser un privilegio, una potestad o una inmunidad, más que un derecho (subjetivo) en sentido estricto”¹².

Para remediar este desorden terminológico se propone una calificación apropiada a nuestro problema, aquella que entiende el correlativo jurídico entre potestades y sujeciones (*liabilities*). Se entiende ahí la potestad como el correlativo de una sujeción jurídica y en la hipótesis pertinente

“un cambio en una determinada relación jurídica que resulta de algún hecho o grupo de hechos sobrevinientes que están bajo el control de la voluntad de uno o más seres humanos [...] se puede decir que, la persona (o personas) cuyo contralor es decisivo tiene la potestad (jurídica) de efectuar el particular cambio en la relación jurídica en juego”¹³.

¹⁰ VIDAL (2019), s/p.

¹¹ DE LA MAZA y VIDAL (2018), p. 515.

¹² HOHFELD (2001), p. 47.

¹³ HOHFELD (2001), p. 68.

De conformidad con lo anterior, la palabra “derecho” resulta inadecuada para este tipo de situaciones, pues exige una correlación de un sujeto en posición de deudor, quedando sometido a la exigencia de realizar una prestación a favor del acreedor. Al referirnos a un derecho del acreedor una vez cumplidas las exigencias para la resolución, debería justificarse de manera coetánea y correlativa un deber en sentido propio, pues no hay derecho sin que exista un recíproco deber. Luego, lo que cabría preguntarse es cuál es el deber correlativo al derecho a resolver, lo que tiene como respuesta que no existe, pues el deudor contra quien se hará valer la resolución no está en una posición de obligación, sino de sujeción, al tener que soportar las consecuencias de la resolución satisfechas sus condiciones y si así lo quiere el titular, lo que puede ejercer de manera unilateral. El cambio en la relación jurídica una vez cumplidos los requisitos convencionales o legales de la resolución dependen de la sola voluntad de su titular, la parte en posición de acreedor, sin que podamos predicar que la deudora, esté en situación de obligado, sino que está sujeto a las consecuencias de la decisión del titular de la potestad¹⁴.

En suma, el incumplimiento resolutorio, ya sea porque la conducta de una de las partes calza con alguna de las hipótesis de incumplimiento descritas en la cláusula resolutoria, o porque se trata de un incumplimiento esencial del contrato y, por ende, resolutorio, coloca a la otra parte, dado el carácter bilateral del contrato, en acreedor y en cuanto tal, titular de la potestad resolutoria, calificación relacional que, en forma concomitante, importa que la otra parte, está en la posición de sujeción. No existen, por ende, a partir de la cláusula resolutoria derechos y obligaciones a sujetarse a ella y solo a ella en caso de incumplimiento resolutorio, sino que una potestad a favor del acreedor.

La voluntad del titular de la potestad resolutoria es lo único relevante para que opere la resolución habiéndose satisfecho las condiciones de este remedio contractual. Entendida así la expresión potestad aplicada a la resolución del contrato, coincide con lo aseverado por de la Maza y Vidal y lo expresado por Perlingieri, quien otorga el calificativo de “derecho potestativo” a

“la situación subjetiva activa que definimos como derecho potestativo atribuye a su titular el poder de provocar unilateralmente un hecho jurídico que comporta consecuencias desfavorables para otro sujeto. Por esta razón, el derecho potestativo también puede denominarse poder formativo: su titular puede constituir, modificar o extinguir una situación subjetiva, unilateralmente, a pesar de que eso signi-

¹⁴ ARRIAGADA (2014), p. 17.

fique la invasión de la esfera jurídica de otro sujeto que, además, no puede evitar tal acción, es decir, debe someterse al ejercicio del poder”¹⁵.

Esta explícita adherencia justifica la conveniencia de la resolución convencional por dicho carácter potestativo, al no ser necesaria la sentencia judicial¹⁶.

El mismo Perlingieri afirma que

“un derecho existe siempre que exista el correlativo deber; y existen obligaciones y deberes siempre que existan intereses protegidos que se centran en el cumplimiento de una obligación o de un deber”¹⁷.

En cambio, en el caso del derecho potestativo, el otro se encuentra en una posición de sujeción, la que entiende que

“es la posición correlativa del sujeto que no puede oponerse al ejercicio del derecho potestativo y que debe sufrir el efecto desfavorable que supone para él”¹⁸.

116

Este autor avanza en una explicación correlativa para el derecho potestativo al sostener que

“el titular de la sumisión no puede impedir la producción de los efectos en la misma esfera, incluso es cierto que él es titular de una obligación o, si se prefiere, de un deber genérico de no impedir no que el titular del poder cumpla el acto ni que alcance el resultado previsto”¹⁹.

No podemos dejar de observar una inconsistencia, pues el titular de la potestad no puede reclamar a través de una acción dicha abstención u obli-

¹⁵ PERLINGIERI (2008), p. 621. El autor alude a “derecho potestativo” en un sentido análogo a la potestad en las categorías hohfeldianas, pero el hecho de combinar las palabras “derecho” y “potestativo” es ambiguo atendida la caracterización que hace de derecho subjetivo, pues el correlativo de derecho es una obligación y de la potestad es la sujeción.

¹⁶ DE LA MAZA y VIDAL (2018), p. 508, señalan: “Al examinar la regla contenida en el artículo 1489, podemos detectar una serie de inconvenientes que invitan a las partes a configurar de forma convencional el remedio resolutorio. En primer lugar, el carácter potestativo del remedio, es decir, la resolución opera por sentencia judicial, por lo que el comprador debe iniciar un juicio ordinario (resolución por declaración judicial)”.

¹⁷ PERLINGIERI (2008), p. 611.

¹⁸ PERLINGIERI (2008), p. 622.

¹⁹ PERLINGIERI (2008), p. 622.

gación de no hacer, sino que puede ejercer su potestad quedando sometido el deudor.

El unilateralismo aparece como un trazo distintivo de la potestad o del derecho potestativo, si se le quiere llamar así, pues lo que importa, es que depende de la sola voluntad de su titular, sin miramiento de los efectos negativos sobre quien recae²⁰. La potestad otorga la posibilidad a su titular de modificar una determinada situación jurídica. Acá se presenta su efecto directo: “la modificación de la situación jurídica aparece como el efecto automático de todo derecho potestativo”²¹. Tratándose de la resolución convencional, una vez verificado el incumplimiento, conforme a lo pactado, el acreedor puede, si así lo quiere, modificar la situación jurídica, tanto propia como de su contraparte, colocando término al vínculo a través de la notificación. Los denominados “derechos potestativos” se manifiestan en las etapas de formación, existencia y término del contrato. En lo que nos atañe, una de las partes puede disponer de la facultad de resolver a título de sanción del incumplimiento

“como lo prevén las cláusulas organizando la resolución del contrato cuando una de las formas de incumplimiento previstas aparece”²².

Hasta acá hemos destacado el efecto extintivo de la potestad, la cual genera un cambio de la situación jurídica de las partes mediante la notificación del deseo de resolver el contrato conforme a lo pactado. Su origen es convencional, asignando a cada parte, en el evento que le afecte uno de esos incumplimientos resolutorios, la potestad para extinguir la relación contractual a través de la notificación de su decisión de resolver el contrato. Como se ha indicado, la potestad, en este caso resolutoria emanada de la convención, funciona en tres tiempos: el acuerdo de los contratantes, la redacción y aprobación del contrato y de la cláusula que lo integra; el ejercicio de la potestad resolutoria cumplidas sus condiciones; y, el efecto directo del ejercicio, la extinción del contrato²³.

En suma, si asumimos que la resolución convencional otorga al acreedor una potestad o si se quiere un “derecho potestativo”, la solución sobre la compatibilidad entre la resolución convencional y la acción resolutoria debiera fluir de manera más simple, incluso obvia. No existiría una obligación de someterse a la cláusula resolutoria para resolver el contrato, que-

²⁰ POMART-NOMDEDEO (2010), p. 209.

²¹ POMART-NOMDEDEO (2010), p. 213.

²² ROCHFELD (2001), p. 754.

²³ POMART-NOMDEDEO (2010), p. 224.

dando excluida la resolución judicial, pues eso significaría traicionar la calificación de potestad o derecho potestativo a favor del acreedor al satisfacerse las condiciones de la resolución, ya sea por vía convencional o judicial.

II. LA DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO DE LO INCIERTO DEL TÉRMINO DEL CONTRATO

Una fórmula frecuente en los escritos jurídicos explica que el contrato es un instrumento de distribución de riesgos. Es un acto de previsión, un intento sempiterno de excluir el imprevisto²⁴. Como es evidente, el contrato recae en un contenido fruto del acuerdo donde se contemplan las previsiones de las partes. Lécuyer señala que

“[U]na proyección hacia el futuro permite aprehender la suerte reservada a las previsiones de los contratantes. Éstas pueden ser defraudadas o por el contrario confirmadas”²⁵.

118 Según lo anterior, debemos aclarar, entonces, qué ocurre si las previsiones establecidas en la cláusula resolutoria resultan defraudadas al optarse por la resolución judicial, colocando a una de las partes en una situación imprevista o sorpresiva, que redunden en una alteración de la distribución de los riesgos que se acordó.

Antes de responder, es importante clarificar aquello que refiere a lo incierto de lo que alude a lo imprevisto. El contrato permite excluir no sólo lo primero, sino también lo segundo, pero de manera diversa. Por eso, se ha afirmado que

“[L]a puesta en práctica de garantías contra lo incierto implica que las partes identifican ciertos riesgos, y colocan en práctica diversos mecanismos para neutralizar el incidente. En cuanto a lo imprevisto, su aprehensión es distinta. Ella no supone una identificación de un riesgo determinado, sino la estipulación de un remedio general, cuyo desenvolvimiento no está subordinado a la realización de un riesgo, sino a la amplitud de sus consecuencias sobre el contrato”²⁶.

²⁴ THIBIERGE (2011), p. 3 y ss. y LÉCUYER (1999), p. 643 y ss.

²⁵ LÉCUYER (1999), p. 654.

²⁶ THIBIERGE (2011), p. 41.

Las partes pueden regular los riesgos precisos que se representen, lo que constituye una organización de lo incierto, en cuanto a su ocurrencia, mas no se refieren ahí a lo imprevisto, pues en ese caso fueron ciegas, quedando ajenas a la ocurrencia de determinados sucesos futuros que merecen el calificativo de imprevistos. Thibierge lo explica de manera elocuente:

“El imprevisto se distingue claramente de lo incierto. El primero designa un hecho que las partes no han identificado. El segundo califica el hecho al cual las partes pensaron, pero cuya realización es percibida como aleatoria. El contrato puede aprehender el futuro, compuesto de lo incierto y de lo imprevisto, de dos maneras distintas. Puede ser que las partes temen al futuro: ellas tratarán de encuadrar las consecuencias de lo incierto y de lo imprevisto. O puede ser, en sentido inverso, que las partes vean en el futuro una oportunidad favorable. En esta hipótesis, ellas van a especular sobre la ocurrencia de lo incierto. La especulación sobre lo imprevisto es más delicada, en el sentido que se manifiesta imposible en el estado puro, e incierta en su forma derivada”²⁷.

Se ha planteado que la opción por la resolución judicial en un contexto de compatibilidad con la convencional, constituiría una alteración de los riesgos asociados al término del contrato. De la Maza y Vidal afirman que

119

“La cláusula resolutoria no está establecida en el sólo interés del acreedor, sino que en el de ambas partes, pues es a través de ella que las partes distribuyen los riesgos anexos a la destrucción del contrato. Habida cuenta que la cláusula es parte integrante del contrato, el reconocimiento de la facultad del acreedor para renunciar a ella implica aceptar una modificación unilateral del contrato. No debemos confundir el carácter renunciabile de la facultad resolutoria e incluso el efecto resolutorio en una cláusula de resolución automática, con la renuncia unilateral de la cláusula que es parte del contenido contractual”²⁸.

Estas mismas afirmaciones ya expresadas en el libro de los autores de la Maza y Vidal se repite en el artículo de Vidal, quien nos indica que:

“La cláusula resolutoria no está establecida en el solo interés del acreedor, sino en el de ambas partes. Por estas cláusulas, las partes

²⁷ THIBIERGE (2011), p. 55.

²⁸ DE LA MAZA y VIDAL (2018), p. 521.

distribuyen el riesgo de la resolución, confiriendo certeza a ambas partes acerca de cuándo procede y cuándo no la resolución. Tal cláusula es fruto de una negociación e integra el contrato, de modo que reconocer al acreedor la facultad de renunciar a ella, implicaría aceptar una modificación unilateral del contrato. Creemos que no podemos confundir el carácter renunciabile de la facultad resolutoria, e incluso del efecto resolutorio en una cláusula de resolución automática, con el pretendido carácter renunciabile de la cláusula para el acreedor, teniendo en especial consideración que ella, como otras cláusulas, integran el contenido del contrato”²⁹.

Y concluye señalando que

“Aceptar la compatibilidad y reconocer la opción al acreedor entre ambas resoluciones, de acuerdo con esta segunda posición, implicaría admitir la modificación unilateral del contrato por parte de esta última parte”³⁰.

120

El primer argumento radica en entender que los contratantes no podrían prevalerse de la resolución judicial al haber acordado una cláusula resolutoria, pues las partes ahí “distribuyeron el riesgo de la resolución” y tendrían claridad sobre cómo operaría.

Podemos aseverar que el asunto refiere a lo incierto, mas no a un imprevisto. El riesgo que se denuncia, que las partes habrían establecido la forma exclusiva de terminar el contrato en caso de incumplimiento resolutorio, bajo un esquema de resolución convencional, única posibilidad de terminar el contrato en caso de verificarse la inejecución, significaría haber erradicado el riesgo de una resolución judicial. Se habría excluido el riesgo de término del contrato bajo un modelo diverso, aquel de la resolución judicial. No se trata de lo imprevisto, pues el supuesto riesgo, la forma de resolver el contrato, habría sido conocido por las partes.

No compartimos esta apreciación, dada la naturaleza de las instituciones en cuestión. La cláusula resolutoria constituye un elemento accidental, pues requiere de acuerdo para incorporarse al contrato. Lo dice el artículo 1444 del *Código Civil*

“y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”.

²⁹ VIDAL (2019), s/p.

³⁰ VIDAL (2019), s/p.

En cambio, la resolución judicial es un elemento de la naturaleza, los cuales se definen como “no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial”.

Si las referidas calificaciones son correctas, la exclusión de un elemento de la naturaleza requiere un acuerdo expreso, sin el cual, mal podría entenderse que las partes se han desprendido de dicho elemento que se incorpora al contrato ante su silencio. Mientras no exista una cláusula que determine la supresión de la acción resolutoria, emanada de la denominada condición resolutoria tácita, pervive, pues en cuanto elemento de la naturaleza integra el acuerdo. No basta la mera inclusión de la cláusula resolutoria para relegar la acción del artículo 1489 del *Código Civil*, pues eso importaría entender que los elementos de la naturaleza pueden quedar sin efecto por el simple hecho de acordar esta clase de pactos.

La distribución de riesgos del incumplimiento y, en particular, del término del contrato, no se afectan al considerar la compatibilidad de la resolución convencional y la acción resolutoria, ya que al no haberse suprimido esta última por las partes de manera expresa, lo cual pudieron hacer al tratarse de un elemento de la naturaleza, importa que ambas asumieron, a la época de celebrar el contrato, la posibilidad o eventualidad que el contrato terminare en caso de incumplimiento por la vía extrajudicial o judicial. No puede haber sorpresa, entonces, si se ejerce la acción resolutoria, pues si no hubo una supresión explícita, no puede entenderse sustraída la potestad para resolver el contrato por vía judicial.

121

III. LA PRETENDIDA MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

Al concluir que la vía judicial para reclamar la resolución no está vedada para los contratantes, salvo expresión que la excluya, conforme la calificación de elemento de la naturaleza, debemos hacernos cargo de la segunda imputación a la tesis de la compatibilidad. Según esta posición, la renuncia a la cláusula resolutoria y la opción por la vía judicial importaría una alteración unilateral del contrato³¹. La parte que recurre al tribunal a solicitar la resolución estaría desconociendo lo pactado, al no apegarse a la estipulación que regula la resolución.

Antes de que abordemos la posible modificación unilateral, debemos excluir la relación que se hace con la renuncia a la cláusula resolutoria. Una aclaración primaria es despejar que no hay renuncia a la cláusula resolutoria. Lo que puede existir es la decisión del titular de la potestad reso-

³¹ DE LA MAZA y VIDAL (2018), p. 521.

lutoria de no ejercerla, lo que es lícito y conforme la naturaleza de potestad o derecho potestativo que se le ha asignado a la posición del acreedor, verificado el incumplimiento resolutorio previsto en la cláusula. Asumir la imposibilidad de renuncia a la cláusula resolutoria y, al mismo tiempo, su naturaleza de potestad o derecho potestativo constituye una contradicción insalvable. El acreedor puede o no colocar término al contrato mediante la resolución convencional dado el carácter voluntario y unilateral de la potestad resolutoria. En consecuencia, creer en la calificación de potestad resolutoria importa necesariamente optar por su carácter unilateral y voluntario para su titular, quedando el deudor en estado de sujeción, sin consecuencias para el acreedor que decida no colocar en práctica la potestad resolutoria. No percibimos ahí una renuncia, pues lo único que se verifica es la decisión de no utilizar la potestad resolutoria, lo que es consistente con su carácter voluntario, disponible y unilateral.

Distinta es la problemática de la modificación unilateral del contrato³². Si reconocemos el carácter de potestad a la posición de una de las partes al verificarse el incumplimiento resolutorio previsto en la cláusula, ¿de qué manera la acción resolutoria judicial modifica el contrato? Si no existe ningún acuerdo explícito de renuncia a la resolución judicial o, lo que es lo mismo, la exclusión de la acción resolutoria, no existe alteración o cambio alguno del contrato si se demanda la resolución judicial. Tampoco se ve afectada la cláusula resolutoria. Ésta sigue en los mismos términos, no ha variado un ápice, y eso ni siquiera es cuestionado por la parte que demanda la resolución judicial. No hay modificación de los incumplimientos resolutorios ahí pactados, tampoco del procedimiento para hacer valer la resolución convencional. En consecuencia, la alteración contractual no operaría en cuanto al texto del acuerdo, sino que existiría un deber del titular de la potestad resolutoria de ejercerla sólo por esa vía, mas no por la acción judicial. La tesis de la modificación lleva a entender que cada vez que se reconozca una potestad en virtud del contrato, el titular no podría desconocerla recurriendo a una vía alternativa cuyas condiciones también estuvieren cumplidas.

A nuestro entender, la modificación del contrato consiste en alterar los términos en los cuales fue acordado. Es decir, un contrato se modifica si las cláusulas que lo componen se cambian, ya sea por la voluntad consensuada de las partes o por una decisión unilateral de uno de los contratantes. En la primera hipótesis no se perciben problemas, pues las partes pueden modificar el contrato cuanto les parezca cambiando la relación contractual

³² En 1907 René Demogue planteó este asunto bajo el título *Des modifications aux contrats par volonté unilatérale*, cuyo texto es analizado por Christophe Jamin, en DEMOGUE y JAMIN (2013), p. 1 y ss.

a partir de ese momento. También es posible que el contrato varíe pero por la mera voluntad de una de las partes, lo cual se debe sustentar en el acuerdo mismo. Esto quiere decir que una de las partes, en virtud del propio contrato puede mutar las obligaciones de la otra parte. Acá no hay sorpresa. Ambas partes al celebrar el contrato acordaron que una de ellas podría modificarlo en los términos acordados informándoselo a la otra. Existe acuerdo en la potestad de modificar de manera unilateral el contrato.

Lo anterior, ocurre en los contratos de obra pública de manera frecuente. El mandante puede exigir al constructor que ejecutó obras extraordinarias hasta un determinado porcentaje del precio del contrato. No sólo se altera la obligación esencial del constructor, aquella de hacer la construcción misma, sino también el precio.

En consecuencia, la modificación del contrato puede operar por acuerdo de las partes o por decisión unilateral de una de ellas siempre y cuando así se haya pactado, reconduciendo la potestad unilateral al contrato. Distinta es la situación que se achaca a la opción de la acción resolutoria por sobre la resolución convencional. ¿De qué manera puede entenderse que existe una modificación del contrato unilateral si se ejerce la acción resolutoria en vez de la resolución convencional?

Al referirnos a la modificación unilateral del contrato aludimos a otra potestad de una de las partes, la cual conforme a lo acordado puede cambiar sus términos. Es decir, la modificación del contrato importa alterar su contenido, de manera tal que alguna o algunas de las cláusulas contractuales y, por lo mismo, los derechos y obligaciones resultan modificados por la voluntad unilateral de una de las partes. O sea, la modificación unilateral del contrato requiere como condición esencial que se haya pactado a favor de una de las partes la potestad para realizarlo. Variados contratos muestran este fenómeno que otorga a las partes la potestad unilateral de modificar el contrato quedando la otra sujeta a esa modificación. La intangibilidad del contrato se pretende afectada, quedando parte del contrato a merced de la voluntad unilateral durante la ejecución del contrato, pero eso sólo puede justificarse por el mismo acuerdo que otorga dicha potestad³³. La necesidad de adaptar los contratos de mediana o larga duración flexibilizó la concepción rígida de la intangibilidad del contrato otorgando un lugar creciente al unilateralismo, posibilitando la adaptación del contrato al cambio de circunstancias o requerimientos surgidos en la etapa de ejecución.

De conformidad con lo anterior, no corresponde entonces referirse a la modificación unilateral del contrato cuando una de las partes desconoce lo acordado, pues plantea una confusión entre incumplimiento y

³³ FABRE-MAGNAN (2016), pp. 370 y 371.

modificación unilateral del contrato. Si existiere la imposibilidad de recurrir a la resolución judicial, pues se le habría excluido *per se* al haberse pactado una cláusula resolutoria no debería hablarse de modificación unilateral del contrato, sino de un incumplimiento contractual. Dado que eso no es efectivo, pues en el ejercicio de la potestad resolutoria el acreedor puede abstenerse de colocar en práctica la resolución convencional y, en cambio, optar por la resolución judicial, no sólo no concurre una modificación unilateral del contrato, el cual queda incólume, sino que tampoco puede predicarse un incumplimiento contractual.

Sin embargo, flota el argumento para rechazar la resolución judicial de la denominada distribución de riesgos que se efectuaría mediante la cláusula resolutoria, los cuales se identifican con la forma y el momento en que operaría la resolución ante un incumplimiento resolutorio.

Respecto de este punto, debemos decir que el uso de la palabra “riesgo” es escaso en el *Código Civil*, y en materia de contratos sólo aparece a propósito de la denominada teoría de los riesgos de la especie o cuerpo cierto que se destruye pendiente la entrega por fuerza mayor –artículo 1550– y en el mandato cuando el artículo 2116 lo define aludiendo que el mandante asume por su cuenta y riesgo lo encomendado al mandatario.

124 En el Derecho privado su aparición remonta al medioevo en el ámbito del seguro en los préstamos a la gruesa aventura en el transporte marítimo basado en el cálculo de probabilidades³⁴.

El riesgo consiste en la probabilidad de la ocurrencia de un suceso conocido por las partes cuya asunción en caso de ocurrencia se considera en el contrato. El riesgo planteado así, como “toda desviación en relación a la línea trazada, al proyecto inicial social, económico o financiero en que las partes estaban inicialmente de acuerdo”³⁵, recaería en nuestro problema en la resolución judicial. Ésta sería el riesgo a evitar en caso de incumplimiento, lo que se habría considerado al haberse pactado la resolución convencional. Si consideramos que las partes no gestionaron ese supuesto riesgo en el contrato, pues nada dijeron sobre la resolución judicial, sino que sólo acordaron la resolución convencional, deberíamos concluir que el riesgo, si así se le quiere llamar, no fue gestionado por las partes.

De esta manera, no es apropiado, al menos así lo estimamos, entender que un riesgo, es decir, un evento respecto del cual existen probabilidades de que acaezca, ha sido gestionado por las partes por la vía indirecta de regular otra institución, aunque refiera al mismo asunto, salvo que exista una incompatibilidad explícita. Por ejemplo, las partes gestionan el riesgo del incumplimiento pactando una cláusula penal, y si el acreedor verifi-

³⁴ MARTIN (2009), p. 3 y ss.

³⁵ MOUSSERON (1988), p. 481.

cada la inejecución reclama la pena, no podría el deudor pretender que se probaran los perjuicios. El acreedor, en ese caso, tiene la alternativa de escoger entre la pena y los perjuicios, pero el deudor no puede exigir la prueba de los perjuicios si se opta por la pena. Ahí existe una clara gestión del riesgo del incumplimiento y los daños consecutivos al incumplimiento. Otro caso claro de gestión de remedios contractuales es la exclusión, precisamente, de la resolución, dejando a las partes sólo la alternativa de exigir el cumplimiento forzado. Es decir, las partes acuerdan la renuncia al remedio resolutorio, lo que les impide proceder en ese sentido. Lo mismo ocurre si establecieron una cláusula limitativa de indemnización de perjuicios, lo que no permite que una vez producido el incumplimiento se reclame la totalidad del daño desconociendo el límite acordado. Lo que se gestionó por las partes fue una modalidad en particular de la resolución, la que opera por vía de notificación bajo unos incumplimientos y el procedimiento acordado. Distinto es derivar de ese acuerdo que se haya excluido la resolución judicial, por la mera afirmación de que se gestionó el riesgo del incumplimiento resolutorio y sus efectos a través de la resolución convencional. Esto, no solo porque los efectos de la resolución judicial y convencional son los mismos, sino por la necesaria voluntad explícita requerida para excluir la resolución judicial.

125

IV. EL INTERÉS SE RADICA EN EL TITULAR DE LA POTESTAD RESOLUTORIA

¿La cláusula está establecida en interés de ambas partes? Esta pregunta es lo que parece justificar el impedimento de ejercer la acción resolutoria habiéndose pactado la cláusula. Sin duda que ella, así como todo el contrato y cada una de sus estipulaciones forman parte del interés de quienes lo suscriben, pero lo que se ha pretendido es que la renuncia a la cláusula resolutoria no podría prosperar al estar establecida en interés de ambas partes y no sólo de quien pretende la resolución del contrato ante el juez.

Ya hemos aclarado que no existe renuncia a la cláusula resolutoria, pues las cláusulas en sí mismas no son renunciables, sino los derechos que emanan del contrato. Así, por ejemplo, tratándose del plazo otorgado para el cumplimiento de una obligación, si dicho plazo sólo cede en beneficio de una de las partes, tal como ocurre en el depósito, el depositante podrá renunciar a la espera y requerir la entrega del depósito a su discreción. No habría renuncia a la cláusula en que se acordó la modalidad del plazo, sino a la potestad de requerir la restitución en un tiempo posterior.

En el caso de la cláusula resolutoria, las partes han establecido qué incumplimientos, de alguna de ellas o de ambas, posibilitan colocar término

al contrato, por lo que la cláusula está en el interés de quien al momento del incumplimiento asuma el carácter de acreedor y sea titular de la potestad resolutoria. La disponibilidad de la potestad resolutoria radica en esa calificación, que determina que sea unilateral y voluntaria. Por ende, no cabe justificar la imposibilidad de ejercer la acción resolutoria en un supuesto interés recíproco en la cláusula, la cual habría distribuido los riesgos del término del contrato, pues atendida la naturaleza de potestad del acreedor para ponerle término conforme a lo pactado, el acreedor titular de dicha potestad puede o no puede hacerlo a su discreción. El problema es si al haberse pactado la cláusula se excluyó o no la acción resolutoria del artículo 1489, lo que como hemos aseverado requiere una cláusula expresa en ese sentido.

V. LA UTILIDAD DE LA COMPATIBILIDAD. LA MIRADA PRÁCTICA

126

En Chile, al menos, la Corte Suprema, al fallar el problema de compatibilidad entre la resolución judicial y la cláusula resolutoria favoreció la opción. La misma solución aparece recogida en el actual Derecho francés luego de la reforma del año 2016. Estas decisiones, de la jurisprudencia y de la norma, muestran el interés práctico de la solución de la compatibilidad.

En una sentencia de la Corte Suprema de 9 de diciembre de 2008, ratificó la posición doctrinaria sustentada en este trabajo. En ese fallo se lee:

“Que, sin perjuicio de lo antes indicado, el incumplimiento contractual en que ha incurrido la arrendataria ha hecho operar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1489 del Código Civil, la condición resolutoria envuelta tácitamente en todo contrato bilateral, que, en el caso del arrendamiento, por su especial naturaleza de contrato de tracto sucesivo, opera como causal de término o expiración del mismo y no, en estricto rigor, de resolución. Pues bien, el hecho de haber estipulado las partes un pacto comisorio no puede ser obstáculo, como se afirma en el recurso, para el ejercicio de la acción resolutoria que emana de la condición resolutoria tácita y al haberse verificado el hecho de que pendía tal condición, según se tuvo por acreditado por los jueces de la instancia, debió la sentencia haber declarado el término del arrendamiento y, consecuentemente, condenar al pago de las rentas insolutas”³⁶.

³⁶ *Banco Security con Sociedad de Transportes San Marco* (2008).

En forma reciente el *Código Civil* francés, al regular de manera sistemática las sanciones al incumplimiento contractual, dispuso en el artículo 1227 *in fine* que “la resolución puede, en todo caso, ser demandada ante la justicia”. El tratamiento de la resolución judicial está acorde con su apreciación crítica, al relegarse al último puesto, luego de la cláusula resolutoria y la resolución por notificación. A pesar del tratamiento al final de la resolución judicial, el informe del Presidente de la República indicó de manera clara que la posibilidad de recurrir al juez para la declaración de la resolución se verifica “incluso si una cláusula resolutoria fue prevista en el contrato, o si un procedimiento de resolución por notificación fue entablado”³⁷. Desde otra perspectiva, se ha asignado a esta norma el reconocimiento de la importancia que mantiene la resolución judicial. La conclusión del texto es clara, afirmándose ahí la plena compatibilidad entre la resolución judicial y la cláusula resolutoria. Se ha sostenido

“La posibilidad de demandar la resolución ‘en todo caso’ arrastra dos consecuencias claras. La primera es que el acreedor puede perseguir la resolución ante la justicia incluso si se beneficia de una cláusula resolutoria. La segunda es que el acreedor puede preferir la vía judicial a la notificación. Mientras no haya operado, el acreedor puede ejercer la acción resolutoria”³⁸.

127

Al referirnos a lo útil de la compatibilidad queremos mostrar que la solución de permitir al acreedor optar por la vía judicial, a pesar de haberse acordado una cláusula resolutoria, permite dar una respuesta al problema usual que se presenta al colocarse de manera imperfecta en práctica la cláusula resolutoria. Esto ocurre de manera usual al procederse con desapego al procedimiento acordado para notificar la voluntad del acreedor de resolver el contrato o no haber respetado el plazo de gracia estipulado. En ambas situaciones, no puede operar el término del contrato en virtud de la cláusula resolutoria. Si se le niega la vía judicial para resolver el contrato, a pesar de la existencia de un incumplimiento esencial del contrato, no podrá resolverlo, quedando sólo en situación de exigir el cumplimiento forzado, lo que podría a esas alturas ser imposible o desprovisto de todo interés para el acreedor. De ahí que posibilitar la opción por la vía judicial sea conveniente en la práctica contractual.

La incompatibilidad requiere una cláusula de renuncia a la resolución, la cual es disponible para las partes; sin ella, la vía judicial siempre estará

³⁷ FABRE-MAGNAN (2016), p. 746.

³⁸ DESHAYES *et al.* (2016), p. 746.

abierta, lo que constituye un evento posible que las partes deben considerar si no han acordado la referida cláusula de renuncia a la resolución judicial.

CONCLUSIONES

La resolución debe considerarse como una potestad, lo que importa un carácter unilateral y voluntario para el acreedor y una sujeción para el deudor una vez verificado el incumplimiento resolutorio.

La resolución judicial constituye un elemento de la naturaleza del contrato que requiere un acuerdo explícito para excluirla, es decir, una cláusula de renuncia a la resolución judicial. En cambio, la cláusula resolutoria es un elemento accidental al contrato, por lo que su carácter excepcional importa una interpretación estricta.

La cláusula resolutoria no justifica por sí misma una distribución de riesgos del término del contrato, lo que sólo puede verificarse a través de una cláusula de renuncia a la resolución judicial.

La modificación unilateral del contrato opera por la vía convencional autorizando a una de las partes a alterar lo acordado de manera lícita.

128

No debe confundirse el incumplimiento con la modificación unilateral del contrato. Mientras el primero significa no ejecutar lo pactado, ejecutarlo de manera imperfecta o de forma tardía; la segunda opera mediante una potestad de su titular para alterar el contrato.

La cláusula resolutoria no se altera por el ejercicio de la acción resolutoria, queda incólume, sólo que no opera por decisión del titular de la potestad resolutoria.

La compatibilidad entre la acción judicial para resolver el contrato y la resolución en virtud de la cláusula resolutoria es la regla general, salvo que de manera expresa se haya renunciado a la resolución judicial.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ÁLVAREZ, Rafael (2009). *La resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento* (4ª edición). Granada: Comares.
- ARRIAGADA, María (2014). “El concepto Hohfeldiano del derecho subjetivo”. *Revista de Ciencias Sociales*, n.º 65, Valparaíso.
- CARBONNIER, Jean (2004). *Droit civil. Les biens. Les obligations. Quadrige*. Paris: Puf.
- CÁRDENAS, Hugo y Ricardo REVECO (2018). *Remedios contractuales. Cláusulas, acciones y otros mecanismos de tutela del crédito*. Santiago: Thomson Reuters.
- CLEMENTE, Mario (1998). *La facultad de resolver los contratos por incumplimiento*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- DE LA MAZA, Iñigo y Álvaro VIDAL (2018). *Cuestiones de Derecho de Contratos. Formación, Incumplimiento y Remedios. Doctrina y Jurisprudencia*. Santiago: Thomson Reuters.
- DEMOGUE, René y Christophe JAMIN (2013). *Des modifications aux contrats par volonté unilatérale*. Paris: Dalloz.
- DESHAYES, Olivier; GENICON Thomas e Yves-Marie LATHIER (2016). *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – Commentaire article par article*. Paris: LexisNexis.
- FABRE-MAGNAN, Muriel (2008). *Droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral*. Paris: Thémis droit-Puf, tomo I.
- FABRE-MAGNAN, Muriel (2016). *Droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral*. Paris: Thémis droit-Puf.
- GENICON, Thomas (2007). *La résolution du contrat pour inexécution*. Paris: LGDJ.
- HOHFELD, Wesley (2001). *Conceptos jurídicos fundamentales*. (5ª edición) (trad.) Genaro CARRIÓ. México: Fontamara.
- LÉCUYER, Hervé (1999). “Le contrat, acte de prévision”, en *L’avenir du droit. Mélanges en hommages à François Terré*. Paris: Dalloz-Puf.
- MARTIN, Anne-Cécile (2009). *L’imputation des risques entre contractants*. Paris: LGDJ.
- MEJÍAS, Claudia (2011a). “El incumplimiento que faculta a resolver el contrato a la luz de las disposiciones del Código Civil”, en Iñigo DE LA MAZA (coord.). *Incumplimiento contractual. Nuevas perspectivas. Cuadernos de Análisis Jurídico. Colección Derecho Privado*. Santiago: Universidad Diego Portales.
- MEJÍAS, Claudia (2011b). *El incumplimiento resolutorio en el Código Civil*. Santiago: Legal Publishing.
- MOMBERG, Rodrigo y Carlos PIZARRO (2018). “Las restituciones consecutivas a la nulidad o resolución en los contratos de bienes muebles”. *Revista Ius et Praxis*, vol. 24, n.º 1, Talca.
- MOUSSERON, Jean-Marc (1988). “La gestion des risques par le contrat”. *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, n.º 3, Paris.
- PERLINGIERI, Pietro (2008). *El derecho civil en la legalidad constitucional*. Madrid: Dykinson.
- PIZARRO, Carlos (2012). “Contra el efecto retroactivo de la resolución por incumplimiento contractual”, en Fabián ELORRIAGA (coord.). *Estudios de derecho civil VII. Jornadas Nacionales de Derecho Civil Viña del Mar 2011*. Santiago: Abeledo Perrot-Thomson Reuters.
- PIZARRO, Carlos (2013). “Cláusula resolutoria y pacto comisorio calificado. Tan lejos, tan cerca”, en Carmen DOMÍNGUEZ et al. (coords.). *Estudios de Derecho Civil VIII, Jornadas Nacionales de Derecho Civil Santa Cruz, 2012*. Santiago: Legal Publishing-Thomson Reuters.
- POMART-NOMDEDEO, Cathy (2010). “Le régime juridique des droits potestatifs en matière contractuelle, entre unité et diversité”. *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, n.º 2, Paris.

- ROCHFELD, Judith (2001). “Les droits potestatifs accordés par le contrat”, en *Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXI^e siècle*. Paris: LGDJ.
- THIBIERGE, Louis (2011). *Le contrat face à l'imprevu*. Paris: Economica.
- VIDAL OLIVARES, Álvaro (2019). “La cláusula resolutoria como manifestación de la facultad de resolver el contrato. Problemas en torno a su eficacia en el Código Civil chileno”. *Vniversitas*, vol. 68, n.º 138. Disponible en: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj138.crmf> [Fecha de consulta: 23 de julio de 2021].

Normas citadas

Código Civil.

Jurisprudencia citada

Banco Security con Sociedad de Transportes San Marco (2008): Corte Suprema, 9 de diciembre de 2008, rol n.º 5821-2007, VLEX 332826458.